

Santiago, uno de julio de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de seis de marzo de dos mil veinticuatro, en los antecedentes RUC 1.800.386.575-0, RIT 310-2023, condenó a José Patricio Fonseca Córdova a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y a las accesorias legales, como autor de un delito de homicidio, en grado frustrado, en la persona de Cristian Andrés García Rivas, hecho ocurrido, el día 19 de abril de 2018, en esta ciudad.

En contra de dicho fallo, la defensa del sentenciado recurrió de nulidad, arbitrio que se conoció en la audiencia pública de once de junio pasado, oportunidad en la cual se incorporó la prueba ofrecida por la defensa en su recurso y aceptada por esta Corte, convocándose a los intervinientes a la comunicación de la sentencia para el día de hoy, como consta del acta respectiva.

**Considerando:**

**Primero:** Que, el recurso de nulidad propuesto por la defensa se asila, de manera primordial, en el motivo absoluto de invalidación previsto en el artículo 374, letra f) del Código Procesal Penal, afirmando que, en el presente caso, las acusaciones del Ministerio Público y las de las querellantes no contienen una descripción fáctica del delito de homicidio simple, en grado de desarrollo frustrado, contenido en el artículo 391, N° 2, en relación con el artículo 7°, ambos del código punitivo.

Explica que, de los hechos descritos en la acusación fiscal, su calificación jurídica y la pena solicitada, se logra concluir una figura culposa, constitutiva de un cuasidelito de lesiones graves. En síntesis, a su defendido se



le imputa que, en su calidad de Cabo 2º de Carabineros y de servicio, de la dotación de la 40ª Comisaría, el día de los hechos y a la hora señalada, conducía —sin estar atento a las condiciones del tránsito del momento— un bus policial destinado al Control del Orden Público, por calle Libertad, al llegar al N° 37, de la comuna de Santiago, oportunidad en la cual el imputado desvió su desplazamiento hacia la derecha, impactando a la víctima, lo que le causó lesiones graves.

Por su parte, la querellante en su acusación particular planteó exactamente el mismo presupuesto fáctico propuesto por el ente persecutor, pero calificando dichos hechos como constitutivos del delito de homicidio simple, en grado de desarrollo frustrado, quedando en absoluta evidencia, que, dicho acusador, califica los mismos hechos descritos como culposos como figura dolosa, sin mayor alteración fáctica que le habilitara para tales fines.

Respecto a la acusación particular, sostenida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los mismos hechos son reproducidos, pero sustituyendo las expresiones “impactando” por “atropellando” e “impacto” por “arrollamiento”. Además, suprime la frase propuesta por la Fiscalía y la querellante víctima consistente en que acusado conducía el Bus “sin estar atento” manteniendo el resto del núcleo fáctico sostenido por la fiscalía para calificar el hecho como de lesiones graves.

El motivo decimosegundo del fallo que impugna precisó que, la prueba rendida permitió acreditar que el conductor de vehículo especial, semi blindado, denominado Sprinter, que exige una capacitación y formación especializada, con la que el acusado —al momentos de los hechos— contaba, por lo que los mismos los ejecutó actuando con dolo eventual, atendido que debió, a lo menos, haberse representado la posibilidad que, con el impacto generaría en la



víctima —atendido el volumen y características del móvil que conducía— un resultado gravoso cuya magnitud debía prever y, no obstante, aquello ejecutó la ejecutó igualmente.

Expone que, los hechos que se dieron por acreditados en la sentencia y no comprendidos en las respectivas acusaciones exceden con creces la parrilla fáctica propuesta por los acusadores, lo que indefectiblemente produce, en la especie, una alteración trascendental de circunstancias que tienen la magnitud de provocar una verdadera sorpresa a la defensa, razón por la cual solicita la invalidación de la sentencia recurrida y del juicio oral que la antecedió, ordenando la realización de nuevo juicio oral ante jueces no inhabilitados.

En subsidio, propone la causal de nulidad prevista en el literal b), del artículo 373 del compendio adjetivo, exponiendo que, la errónea aplicación del Derecho en el caso de marras se constata debido a que, incluso dando por acertados los hechos probados en la sentencia recurrida —salvo la calificación de dolo eventual— de dicha presupuesta fáctica (lo que se asume por la defensa sólo para los efectos de la interposición de la presente causal, subsidiaria), no debió condenarse al acusado como autor del delito de homicidio simple frustrado, previsto en el artículo 391, N° 2 del Código Penal, sino como autor de un cuasidelito de lesiones, previsto en el artículo 492, en relación con el artículo 490, N° 2, ambos del código de castigo. Es decir, incluso con la modificación fáctica que realiza el tribunal del fondo a los hechos acreditados —infringiendo con ello el artículo 341 del código adjetivo—, los mismos configuran una figura culposa y no un tipo doloso.

Afirma que, el hecho que dio por probado el tribunal no hace referencia alguna a los requisitos o circunstancias del dolo eventual. No se menciona la aceptación del hecho en la voluntad del autor, ni tampoco hace referencia —



como lo exigen algunas teorías acerca del dolo eventual— que el hechor pudo haber tomado medidas o precauciones para evitar el hecho. Estima que el tribunal concluyó que, al establecer un hecho en el cual se suprimió la frase “no estar atento a las condiciones”, necesariamente debe entenderse que, la situación fáctica resulta dolosa *per se*, lo cual no es correcto. Es más, si se analiza atentamente el hecho acreditado por los sentenciadores, lo que se estimó probado resulta compatible con una figura culposa, dado que el “desviar bruscamente el desplazamiento” un vehículo hacia un costado, es perfectamente compatible en una infracción a la Ley de Tránsito —tal como lo es “no estar atento a las condiciones del tránsito”— contemplada en el artículo 138 y 200, N° 5 de la precitada normativa, lo que, a su vez, es coincidente con las figuras culposas del código de castigo, específicamente las del artículo 492, que exigen una infracción a reglamentos.

En segundo lugar, se vislumbra del razonamiento del fallo, que el tribunal adoptó una postura sobre el dolo eventual que mayoritariamente es descartada por nuestra doctrina y jurisprudencia, por lo que pide se invalide únicamente la sentencia y se dicte una de reemplazo, en la cual se condene al acusado a la pena de 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, seis meses de suspensión de licencia de conducir y accesorias legales, por su responsabilidad como autor de un cuasidelito consumado de lesiones graves, previsto en el artículo 397, N° 2, en relación con los artículos 490, N° 2 y 492, todos del Código Penal. Cumpliendo el acusado con los requisitos de la Ley 18.216, se le sustituya la pena por la de remisión condicional.

Como segunda causal de nulidad subsidiaria, también postula aquella contenida en la letra b), del artículo 373 del Código Procesal Penal, observado que el tribunal adoptó una postura respecto al debate jurídico acerca de si los



delitos con formas de desarrollo imperfectas —tentados o frustrados— admiten, en su ejecución, el dolo eventual. Estima que el dolo eventual resulta incompatible con los delitos frustrados. Dicho de otro modo, los ilícitos en grado de desarrollo de tentativa o frustración requieren de dolo directo, razón por la cual pide se invalide únicamente la sentencia y se dicte una de reemplazo, en la cual se condene al acusado a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, más las accesorias legales, por su responsabilidad como autor en un delito consumado de lesiones graves, previsto en el artículo 397, N° 2 del Código Penal y, cumpliendo el con los requisitos de la Ley 18.216, se le sustituya la pena por la de remisión condicional.

**Segundo:** Que, en lo concerniente a los hechos que fundaron la acusación del Ministerio Público, la sentencia impugnada, en su motivo undécimo, tuvo por acreditado que *“...el día de 19 abril de 2018, y cerca de las 13:58 horas, el Cabo 2° de Carabineros José Patricio Fonseca Córdova, de la dotación de la 40° Comisaría de Fuerzas Especiales, quien se encontraba de servicio en el plan ‘Contingencia Plan Marcha’, condujo el bus marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 515, color verde olivo, PPI B-484 por calle Libertad hacia el norte, y al llegar a la altura del N° 37, en la comuna de Santiago, desvió bruscamente su desplazamiento hacia la derecha, atropellando a la víctima Cristhian Andrés García Rivas, para luego chocar al automóvil color gris, estacionado, frente al restaurante Chilenazo, el que resultó ser de propiedad de doña María Zúñiga Valdés.*

*La víctima a consecuencia del arrollamiento por parte del vehículo policial resultó con politraumatismo, fractura fémur izquierdo, fractura ambos techos acetabulares, fractura sacrococxigea izquierda, diástasis sacroilíaca izquierda, fractura apófisis transversa L5 izquierda, fractura estiloides cubital,*



*hematoma piso pélvico y presacro, hematoma perirrenal y retroperitoneal derecho, rabdomiólisis, todas lesiones calificadas graves por el Servicio Médico Legal, atribuibles a un mecanismo de atropello de alta energía, potencialmente mortales las que sin atenciones rápidas y oportunas podrían ser fatales y que suelen sanar en un lapso de 4 semanas con igual periodo de incapacidad laboral”.*

Estos hechos fueron calificados por el tribunal como constitutivos del delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, en grado de frustrado.

En torno a lo afirmado en el recurso de nulidad, el fundamento duodécimo del fallo impugnado estableció que, “...la unión lógica y sistemática de los hechos consignados en el razonamiento anterior permiten calificarlos jurídicamente como constitutivos de un delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 número 2 del Código Penal, en grado de frustrado, toda vez que de la prueba rendida resultó acreditado que el conductor de vehículo especial, semi-blindado, denominado Sprinter PPI, B-484, vehículo que para su conducción exige una capacitación y formación especializada, con la que el acusado, al momentos de los hechos, contaba, por lo que los mismos los ejecutó actuando con dolo eventual, atendido que debió, a lo menos, haberse representado la posibilidad de que con el impacto generaría en la víctima —atendido el volumen y características del móvil que conducía— un resultado gravoso cuya magnitud debía prever, y no obstante aquello ejecutó la ejecutó igualmente, participando en ellos como autor, de conformidad al artículo 15 N° 1° de nuestro Código Penal.

*En efecto el artículo 391 N° 2 del Código Penal, sanciona al que ‘mate a otro en cualquier otro caso’, delito que puede cometerse tanto con dolo directo,*



*como con dolo eventual. El dolo, como cualquier otro elemento del delito, se acredita sobre la base de la prueba rendida en juicio, sin que pueda este confundirse con la necesidad de conocer el fuero interno del autor, ni con la exigencia —en el delito de homicidio— de un particular ánimo de dicho sujeto, como ocurre con el animus necandi. Así, hoy no resulta necesario recurrir a la discusión histórica, de si para la satisfacción de la hipótesis típica, es necesario que concurra la capacidad de una acción para causar la muerte, y la voluntad de llevarla a cabo (MATUS A., Jean Pierre – RAMÍREZ G., María Cecilia, Lecciones de Derecho penal chileno. Parte especial, Santiago, 2015, Tomo I, pp. 34-36).*

*Cabe recordar que ‘Obra con dolo eventual’ quien, habiéndose representado la realización del hecho típico como una secuencia posible de su actuar, acepta en su voluntad esa alternativa para el caso (en la eventualidad) de que se produzca, actúa, en consecuencia, aceptando y aprobando las consecuencias ciertas y probables de su acción.*

*En el presente caso, y teniendo en consideración la acción que el acusado ejecutó, esto es, desviar bruscamente su desplazamiento hacia la derecha, atropellando a la víctima Cristhian Andrés García Rivas, para luego chocar al automóvil color gris, estacionado, frente al restaurante Chilenazo, no es posible en esa acción separar —la representación de la posibilidad del resultado— y la aceptación de aquellos resultados, para establecerlos en forma separada, y con diferentes antecedentes, ya que, la representación y la aceptación de los resultados concurren en un actuar simultáneamente y se sustenta en los mismos antecedentes, que han permitido al Tribunal arribar a dicha convicción.*



*A mayor abundamiento, el razonamiento judicial, atendido lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, tiene como límites la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Así las cosas, acreditado que fue que el curso causal de los hechos, y pese a los descargos que la defensa efectuó a través de la incorporación de piezas de la investigación sumaria que se llevó a cabo a raíz de los mismos hechos, y en atención a que su representado no declaró en juicio, aquellos elementos, lejos de hacer variar la decisión del Tribunal, la afianzó, por cuanto reconoció que ejecutó la maniobra de viraje a la derecha, que se le viene atribuyendo, y que produce el arrollamiento de la víctima, Cristian García Rivas, con las graves consecuencias de las que ya se ha dado cuenta”.*

*Por su parte, el fundamento decimocuarto estableció que, “...para llegar a la conclusión de que los hechos consignados, no fueron constitutivos de un cuasidelito de lesiones graves, el Tribunal estimo, que el actuar del encardo no fue imprudente o temerario, sino por el contrario, actuó con dolo según lo ya se señalado.*

*En el cuasidelito, como pretende que sean calificados los hechos el ente persecutor, hay un acto u omisión negligente o imprudente que causa un daño a otra persona, pero que, no alcanza el nivel de intencionalidad requerido para constituir un delito penal. En la especie, la acción ejecuta por el actor, no es solo negligente, por el contrario, si se sigue la justificación que se entregó de parte de los funcionarios policiales y los antecedentes allegados a juicio por la defensa, incorporando de ese modo la visión del acusado, respecto de los hechos, se observa que se sabía de la presencia del sujeto del overol azul frente al móvil, quien enfrentaba el carro policial, y que, en proporción de masas, desde un sentido físico, era indudablemente muy superior el carro*





*policial en relación a la víctima, es más si se acogiera las justificaciones de los funcionarios policiales se tendría que pensar que no solo se quería lesionar al sujeto de overol azul, sino a esa gran cantidad de manifestantes que, según sus dichos, los atacaban al momento de los hechos. Por lo anterior no se puede estimar que la acción que ejecutó el acusado Fonseca sea solo negligente, que sea una acción que no se realizó con la intención de dañar a alguien, además esas acciones requieren ser, además, imprudentes, con infracción de la regla de cuidado, que se encuentra presente en el disvalor de acción y se plasma en el disvalor de resultado, bajo la mirada del fin de protección de la norma, reglamentaria, como lo indica el Ministerio Público no estar atento a las condiciones del tránsito, la acción de que se viene hablando se hizo consciente, de al menos la presencia de la víctima frente al carro, por lo cual se rechaza la calificación planteada por el Ministerio Público.*

*Que, para llegar a la conclusión de que los hechos consignados, no fueron constitutivos de lesiones graves, como pretende el querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos, es menester tener presente lo sancionado en el artículo del Código Penal, que señala en qué el delito consiste en lesionar a otro, a través de la modalidad específica de herir, golpear o maltratar de obra; acción delictiva que se ve agravada por la duración de los efectos de la lesión, al producir una enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de días, como previene el injusto acusado en el artículo 397 N° del mismo cuerpo legal.*

*De este modo, no es comprensible que se estime que el carro policial, ya que es el objeto utilizado para la acción, sea utilizado para herir, golpear o maltratar de obra, acciones que desde ya, están pensadas en la interacción de personas, con personas, o con el lanzamiento de objetos, que tenga la virtud de golpear, o herir, lo que malamente se puede predicar que ocurra cuando lo*



*que se está utilizando al efecto es una carro policial de gran volumen, con el cual, como ya se dijo, me puedo representar, a través de un dolo eventual respecto del delito de homicidio establecido por el Tribunal, las graves consecuencias de ese actuar”.*

**Tercero:** Que, los hechos de la acusación presentada por el Ministerio Público fueron que, *“el día 19 de abril de 2018, a las 13:30 horas aproximadamente, el acusado, Cabo 2º de Carabineros, José Patricio Fonseca Córdova, de dotación de la 40º Comisaria de Fuerzas Especiales, y quien se encontraba de servicio ‘Contingencia Plan Marcha’, condujo, sin estar atento a las condiciones, el bus marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 515, color verde olivo, PPI B-484 por calle Libertad, al llegar a la altura del N° 37, en la comuna de Santiago, el imputado desvió su desplazamiento hacia la derecha, impactando a la víctima Cristhian Andrés García Rivas, quien a consecuencia del impacto resultó con politraumatismo, fractura fémur izquierdo, fractura ambos techos acetabulares, fractura sacrococcigea izquierda, diastasis sacroiliaca izquierda, fractura apófisis transversa L5 izquierda, fractura de proceso estiloides ulnar derecho, hematoma piso pélvico y presacro, Hematoma Perirrenal y retroperitoneal derecho, lesiones calificadas de graves por el Servicio Médico Legal”*, calificando tales hechos como constitutivos de un cuasidelito de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 490, N° 1, en relación con los artículos 397, N° 1 y 492 del Código Penal, en grado de desarrollo de consumado.

**Cuarto:** Que, por su parte, la querellante dedujo acusación particular, describiendo como hechos que, *“el día 19 de abril de 2018, a las 13:30 horas aproximadamente, el acusado, Cabo 2º de Carabineros, José Patricio Fonseca Córdova, de dotación de la 40º Comisaria de Fuerzas Especiales, y quien se*



*encontraba de servicio 'Contingencia Plan Marcha', condujo, sin estar atento a las condiciones, el bus marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 515, color verde olivo, PPI B-484 por calle Libertad, al llegar a la altura del N° 37, en la comuna de Santiago, el imputado desvió su desplazamiento hacia la derecha, impactando a la víctima Cristhian Andrés García Rivas, quien a consecuencia del impacto resultó con politraumatismo, fractura fémur izquierdo, fractura ambos techos acetabulares, fractura sacrococcigea izquierda, diastasis sacroiliaca izquierda, fractura apófisis transversa L5 izquierda, fractura de proceso estiloides ulnar derecho, hematoma piso pélvico y presacro, Hematoma Perirrenal y retroperitoneal derecho, lesiones calificadas de graves por el Servicio Médico Legal", calificando tales hechos como constitutivos del delito previsto y sancionado en el artículo 391, N° 2 del Código Penal, en relación con el artículo 51 del código del mismo cuerpo legal, esto es homicidio simple, en carácter de frustrado.*

**Quinto:** Que, a su turno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos también acusó particularmente, señalando que, *"el día 19 de abril de 2018, a las 13:30 horas aproximadamente, el acusado, Cabo 2° de Carabineros, José Patricio Fonseca Córdova, de dotación de la 40° Comisaría de Fuerzas Especiales, y quien se encontraba de servicio 'Contingencia Plan Marcha', condujo el bus marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 515, color verde olivo, PPI B-484 por calle Libertad hacia el norte, quien al llegar a la altura del N° 37, en la comuna de Santiago, desvió bruscamente su desplazamiento hacia la derecha, atropellando a la víctima Cristhian Andrés García Rivas, aplastándolo contra un automóvil menor estacionado en el lugar.*

*La víctima a consecuencia del arrollamiento por parte del vehículo policial resultó con politraumatismo, fractura fémur izquierdo, fractura ambos*



*techos acetabulares, fractura sacrococxigea izquierda, diástasis sacroilíaca izquierda, fractura apófisis transversa L5 izquierda, fractura estiloides cubital, hematoma piso pélvico y presacro, hematoma perirrenal y retroperitoneal derecho, rabdomiólisis, todas lesiones calificadas graves por el Servicio Médico Legal”, calificando el *factum* propuesto como constitutivos del delito de lesiones graves, previsto y sancionado en el artículo 397, N° 2 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, en grado de desarrollo consumado.*

**Sexto:** Que, como puede apreciarse, de las tres acusaciones propuestas, dos de ellas comparten una idéntica descripción fáctica — Ministerio Público y querellante—, en tanto que la acusación postulada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, conceptualmente, resulta en una propuesta muy similar.

**Séptimo:** Que, de conformidad con lo que dispone el inciso tercero del artículo 341 del compendio adjetivo, *“si durante la deliberación uno o más jueces consideraren la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta de la establecida en la acusación, que no hubiere sido objeto de discusión durante la audiencia, deberán reabirla, a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella”.*

**Octavo:** Que, como quedó transcrito en el motivo quinto, dos acusaciones invocaban los mismos hechos, calificándolos de manera diversa: el ministerio público instó por condenar al acusado como autor de un cuasidelito de lesiones graves, en tanto que el querellante particular postuló condenarlo como autor del delito de homicidio simple, en grado de desarrollo frustrado. Sin embargo, los hechos que el tribunal dio por establecidos, dado el tenor del fundamento undécimo del fallo en revisión —y sin considerar el agregado de su parte final, que no fue descrito en ninguna de las acusaciones



— se avienen de mejor manera con el postulado factual defendido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sin que conste que se hubiese invitado a los intervinientes a alegar una eventual recalificación de tal propuesta, que fue —en la práctica— lo que hizo el tribunal, pues dicho acusador particular instó por condenar al acusado como autor del ilícito de lesiones graves y los sentenciadores decidieron su condena como autor del delito de homicidio simple, en grado de desarrollo frustrado, sin que la defensa pudiera hacerse cargo de la recalificación de los hechos descritos en la acusación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

**Noveno:** Que, de acuerdo con lo que ordena el inciso primero del citado artículo 341 del código adjetivo, la sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación, *“En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella”*.

Esta regla, conocida como “correlación entre imputación y fallo”, integra —como lo afirman la doctrina y la jurisprudencia—, el derecho de defensa, en cuanto a través de ella, se garantiza que nadie puede ser condenado por un hecho distinto del que ha sido materia de la acusación. (Horvitz, María et al. Derecho Procesal Penal chileno, T. II, p. 426) (Ver jurisprudencia citada por Pfeffer Urquiaga, en Código Procesal Penal Anotado y Concordado, pp. 516-517).

A este respecto, el profesor Carlos del Río Ferretti, nos dice que el referido artículo 341 del Código Procesal Penal, regulador del deber de correlación, declara explícitamente qué elementos de la acusación deben ser respetados por la sentencia y que otros, a pesar de ser parte de la acusación, no demandan la correspondencia de la sentencia. Precisa, que el concepto de objeto del proceso recogido en la ley se define por el hecho punible y que se



excluye del mismo a la calificación jurídica, dejándola en manos del Tribunal, en virtud de la facultad de aplicación del derecho, aunque condicionada por el presupuesto de eficacia de sometimiento a contradicción de la tesis de calificación del Tribunal (Deber de congruencia (rectius, correlación) de la sentencia penal y objeto del proceso: un problema no resuelto en la ley e insoluble para la jurisprudencia chilena, en Revista Ius et Praxis, año 14, N° 2, pp. 87 y ss.)

**Décimo:** Que, por otro lado y respecto del mencionado principio de congruencia, es preciso puntualizar que la infracción al mismo, de acuerdo a la prohibición que consagra el citado artículo 341 del código procesal del ramo, comprende dos aspectos: en primer lugar, y como precedentemente se dijo, que el tribunal está impedido de extender su sentencia a hechos o circunstancias no comprendidos en la acusación; y en segundo término, y aun cuando no se introduzcan hechos no invocados en aquélla, pero se estime que es procedente una nueva calificación jurídica (por aplicación del principio *iura curia novit*), debe necesariamente oírse a los intervinientes y abrir debate sobre el punto, en consonancia con el carácter contradictorio o adversarial del proceso penal.

**Undécimo:** Que, llama la atención a esta Corte que, en los hechos asentados por el tribunal del fondo, se incluyó la expresión *“atribuibles a un mecanismo de atropello de alta energía, potencialmente mortales las que sin atenciones rápidas y oportunas podrían ser fatales y que suelen sanar en un lapso de 4 semanas con igual periodo de incapacidad laboral”*, situación que no fue invocada por ninguno de los acusadores, en sus aludidas presentaciones, lo que, como ha resuelto esta Corte, constituye una sorpresa para quien se defiende, en este caso, trascendente al incidir en la cuantía de la pena a la que



fue condenado, y sobre la cual, durante la secuela del juicio, ni el imputado ni su defensor pudieron cuestionar y enfrentar probatoriamente, lo que claramente importa lesionar el principio de congruencia.

**Duodécimo:** Que, con todo, y aun cuando se estimare que en la especie sólo se trató de una nueva calificación jurídica sin alterar los hechos o circunstancias de las acusaciones, tampoco se dio cumplimiento por los sentenciadores del fondo, en sentido estricto, a la regla del segundo inciso del citado artículo 341 del Código Procesal Penal, puesto que *“una variación brusca de la calificación jurídica puede sorprender a la defensa en algunos casos”* (Maier, Julio. Derecho Procesal Penal, T.I., 1999, p. 569).

En el mismo sentido, Binder apunta que, si *“como consecuencia del principio iuria curia novit el tribunal podría fijar o modificar libremente el significado de los hechos en cuestión (...) si nos atenemos a un concepto amplio de ‘defensa’ veremos que tampoco tiene el tribunal libertad completa para modificar la interpretación jurídica de la imputación. El principio general es que el juicio no puede resultar ‘sorpresivo’ para el imputado. El tribunal debe preocuparse porque no se sorprenda al imputado en ninguna de las fases del juicio porque, en ese caso, se estaría afectando su posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de defensa (...) En consecuencia, si bien en principio el tribunal conserva una cierta libertad para aplicar el Derecho y para apartarse de la calificación jurídica realizada en la acusación o en el auto de apertura a juicio —según el sistema procesal de que se trate—, se debe entender como una violación del derecho de defensa el hecho que la calificación jurídica que hace el tribunal de los mismos hechos resulta sorpresiva y no fue tomada en cuenta en ningún momento del desarrollo del*



*juicio o los debates particulares”* (Binder, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal, 2002, p. 162).

**Decimotercero:** Que tal situación aconteció en la especie, puesto que, por las razones más arriba expresadas, las incongruencias entre acusaciones y sentencia indefectiblemente afectaron en forma grave los derechos del acusado ante el nuevo escenario que debió enfrentar su defensa; tanto por haberse recalificado los hechos propuestos por uno de los acusadores, cuanto porque, sorpresivamente, se incorporó una descripción de hechos no contenidos en ninguna de las acusaciones.

**Decimocuarto:** Que, por lo precedentemente reflexionado, se acogerá el presente recurso por la causal principal impetrada por la defensa, siendo innecesario pronunciarse respecto de las causales subsidiarias, conforme lo prescrito en el artículo 384 inciso segundo del Código Procesal Penal.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 372, 374 letra f), 376 y 384 del Código Procesal Penal, se declara que **se acoge** el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado José Patricio Fonseca Córdova, y, en consecuencia, **se invalida** la sentencia de seis de marzo de dos mil veinticuatro, y el juicio oral que le antecedió, en el proceso RUC 1.800.386.575-0, RIT 310-2023, del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, y se restablece la causa al estado de **realizarse nuevo juicio oral** ante tribunal no inhabilitado.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier.

**Nº 11.231-2024.**





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por el Ministro Sr. Manuel Antonio Valderrama R., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., el Ministro Sr. Jean Pierre Matus A., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G., y Sr. José Miguel Valdivia O. No firma el Ministro Sr. Matus y la Abogada Integrante Sra. Tavorari, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y ausente, respectivamente.



En Santiago, a uno de julio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

